

Plan de Gobierno

Candidato por libre postulación:

Juan Jované

Introducción

Panamá transita hoy por una situación de crisis. Pese al notable crecimiento económico, nos encontramos ante un modelo concentrante y excluyente, que está produciendo una crisis social sin precedentes que se expresa en varios aspectos: pobreza generalizada de la población, inflación y deterioro del poder adquisitivo de las familias, alto desempleo juvenil, inseguridad y criminalidad, debacle de los servicios sociales de salud y educación, crisis del sector agrícola con la consiguiente incapacidad de garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias, la progresiva destrucción ambiental, y el deterioro de la finanzas públicas.

Uno de los rasgos más característicos de la actual situación económica, es el desarrollo de megaproyectos de infraestructuras impulsados por el gobierno y caracterizados por su desconexión con el verdadero desarrollo social del pueblo panameño. Se trata de proyectos que básicamente son útiles para consolidar la posición económica de los sectores dominantes, que en su mayoría muestran notables sobrecostos, explicados por la corrupción generalizada del “negocio de las coimas”, destinado al enriquecimiento de los sectores financieros y burocráticos dominantes. Es una verdadera situación de acumulación por desposesión, la que tendrán que pagar las futuras generaciones, quienes deberán enfrentar el creciente endeudamiento público.

Es este un modelo que se ha agotado, generando, entre otras cosas, serios problemas de liquidez para hacer viable este tipo de política. Así mismo, el agotamiento se expresa en la cada vez más sesgada distribución del ingreso, el creciente endeudamiento público y la falta de solución de los difíciles problemas sociales que, como la inseguridad alimentaria, el déficit de salud y los problemas de la educación debe enfrentar la población. Así mismo, el agotamiento del modelo se expresa en la creciente despreocupación que el mismo mantiene en referencia los problemas ambientales, lo que se expresa, por ejemplo, en la promoción de la minería a cielo abierto y la destrucción de los manglares.

Cada día los sectores populares, así como algunas fuerzas políticas, toman conciencia de este serio problema. Así, por ejemplo, recientemente la reacción popular junto a la unidad de acción de diversas fuerzas políticas y sociales permitió detener las pretensiones del gobierno de vender una parte del patrimonio nacional, cuyo objetivo era el de mantener y profundizar el modelo de acumulación por desposesión, es decir por el saqueo. Esto, desde luego, ha puesto al gobierno en aprietos para el cumplimiento de sus metas y compromisos financieros. Hay que tomar en cuenta que el gobierno ha hecho uso de la llamada “contabilidad creativa”, es decir de subterfugios que como los proyectos “llave en mano” y el considerar inversiones de ENA, ETESA y del Aeropuerto de Tocumen como independientes de las finanzas del sector público no financiero, le ha permitido elevar todavía más el endeudamiento público.

Cada día los sectores populares, así como algunas fuerzas políticas, toman conciencia de este serio problema. Así, por ejemplo, recientemente la reacción popular junto a la unidad de acción de diversas fuerzas políticas y sociales permitió detener las pretensiones del gobierno de vender una parte del patrimonio nacional, cuyo objetivo era el de mantener y profundizar el modelo de acumulación por desposesión, es decir por el saqueo. Esto, desde luego, ha puesto al gobierno en aprietos para el cumplimiento de sus metas y compromisos financieros. Hay que tomar en cuenta que el gobierno ha hecho uso de la llamada “contabilidad creativa”, es decir de subterfugios que como los proyectos “llave en mano” y el considerar inversiones de ENA, ETESA y del Aeropuerto de Tocumen como independientes de las finanzas del sector público no financiero, le ha permitido elevar todavía más el endeudamiento público.

Esta situación aparece agudizada en el proyecto del presupuesto nacional del 2013, siendo cierto, además, que la misma se agudizará a partir del 2014, cuando se inicie un período de mayor repago de la deuda, previéndose, además, la posibilidad de un refinanciamiento en el que la nueva deuda contendrá, en una proporción significativa condiciones adversas en comparación con los préstamos que tradicionalmente se obtenían de algunos organismos financieros multilaterales (BID, FIC, etc.).

En la esfera política asistimos al bizarro espectáculo que representa la lucha entre las diversas fracciones de la oligarquía dominante, unas en función de gobierno y otras en oposición, por llegar a dominar el Estado y utilizarlo como fuente de ganancias e instrumento de acumulación de riquezas, todo esto acompañado por un avanzado proceso de implosión del conjunto de las instituciones públicas. Las maniobras del gobierno dirigidas a tener el control de la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y, por último, el Tribunal Electoral, han precipitado un nuevo alineamiento de la correlación de fuerzas que servían de soporte al orden vigente. .

En el plano social, la incapacidad del modelo se muestra, como se adelantó, en el deterioro, producto de la desidia gubernamental, de los servicios públicos, tales como el abastecimiento de agua potable, los servicios de educación, transporte, cuyos problemas no parecen tener fin, el alto y creciente costo de la canasta de consumo, la inseguridad pública y la criminalidad. Todo este cuadro de abandono de los derechos sociales del pueblo contrasta con el lujo y la opulencia en que viven los sectores financieros, comerciales y burocráticos dominantes, lo que representa una afrenta que eleva el descontento del pueblo frente a la clase gobernante.

La crisis que transcurre en un marco histórico se ha caracterizado por un modelo de crecimiento marcado por el desarrollo desigual, la dependencia y vulnerabilidad con respecto al exterior, así como por la heterogeneidad estructural. En la región metropolitana ha predominado una más amplia penetración de las llamadas tecnologías modernas, sobre todo en los sectores destinados a la generación de servicios de exportación, con el consecuente predominio de la relación salarial propiamente dicha, aún cuando esto no implica la ausencia de los cuenta propia, así como de otras formas

de existencia de la mano de obra en condiciones de informalidad, que influyen como un peso muerto sobre el mercado laboral y las remuneraciones. En el agro, por su parte, aún cuando se observa la presencia de la relación salarial, esta se encuentra más intensamente entremezclada con relaciones tradicionales, previas a las relaciones salariales.

Sin embargo, toda esta complejidad hoy día está inmersa en la dinámica impuesta por los procesos globales proveniente de los centros del sistema, cuya lógica está basada en la acumulación de capital a escala mundial, lo que no solo tiende a mantener los remanentes de una dominación colonial, sino a mantener y reproducir a escala ampliada la dominación neocolonial sobre nuestra economía. Esto, entre otras cosas, distorsiona, retrasa y hasta hace retroceder la formación y pleno desarrollo del mercado interno, a la vez que limita seriamente las posibilidades de la formación de un mercado regional para el desarrollo industrial. Todo esto reproduce la forma desigual y distorsionada de la base productiva - tecnológica, manteniendo la heterogeneidad estructural, así como la consecuente distribución sesgada de los ingresos, en el marco de una creciente insostenibilidad ambiental. La superación de esta lógica resulta una tarea inaplazable para el desarrollo integral del país.

La crisis del país también se expresa en una crisis política y moral, producto del agotamiento de un sistema político excluyente, reflejo de la exclusión económica y social. Un sistema político caracterizado por la corrupción generalizada y descarada, el reparto del poder entre un puñado de partidos y políticos, una autocracia creciente que cancela la división de los poderes públicos, la anulación completa de la democracia en su sentido último de participación colectiva en la toma de decisiones públicas. En el espacio de lo ético la creciente percepción de una corrupción difundida, tanto en el ámbito público como en el privado, llama la atención sobre la creciente descomposición de los valores nacionales que alguna vez sirvieron de base a nuestra sociedad.

La crisis política, social y moral tiene responsables concretos: los partidos políticos y sus dirigentes que se han entronizado desde hace 20 años en el poder. Por esa razón, la solución a esa crisis no puede venir de los que ya han gobernado y han demostrado ser parte del problema. Se requiere que los sectores más conscientes y comprometidos con los intereses populares y nacionales, verdaderamente independientes de los grupos de poder político y económico, nos dispongamos a asumir nuestra responsabilidad y propongamos al conjunto de la nación las acciones que hagan posible las transformaciones que conduzcan a Panamá por los caminos de la democracia participativa, la prosperidad colectiva con respeto a la naturaleza y la justicia social.

Para que nos organicemos y actuemos en todos los terrenos que se requieran, nace esta **agenda de transformaciones**. Ella requiere ciudadanas y ciudadanos dispuestos a enarbolarla y proponerse dirigir los destinos del país por un rumbo diferente al de la partidocracia imperante. No será fácil, pero no queda otra alternativa, si es que queremos salvar el futuro de las próximas generaciones de panameños y panameñas.

Frente a la dura realidad que vive el país resulta urgente levantar un **movimiento independiente de rescate de la nación panameña**. Para avanzar en la definición del contenido y objetivo del mismo, este documento presenta lo que serían sus orientaciones doctrinales básicas, así como un esbozo de los principios que deben animar una estrategia de desarrollo alternativo. Así mismo, se introducen diez líneas de compromiso de acción que se consideran fundamentales e indispensables.

Orientaciones básicas.

El movimiento independiente de rescate nacional es **Democrático y Antineoliberal**. Se constituye como un instrumento de lucha comprometido por la defensa de los principios democráticos, entendiendo la necesidad de avanzar hacia una democracia avanzada de carácter participativa, deliberativa y protagónica, en lo político, social, económico y cultural.

El movimiento independiente de rescate nacional es **Progresista**. Como tal se plantea como una fuerza de transformación, esto es como un proyecto alternativo al neoliberalismo, capaz de sustituir el actual modelo concentrante y excluyente en un modelo con equidad y justicia social.

El movimiento independiente de rescate nacional es **Patriótico**. Lucha por el desarrollo de un país con plena soberanía, en el que el pueblo panameño se constituya el verdadero dueño de su destino.

El movimiento independiente de rescate nacional es **Popular**. Es abierto a todos los sectores afectados por el modelo neoliberal concentrante y excluyente. Expresa los intereses de los trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, productores patrióticos del campo y la ciudad, pensionados y jubilados, amas de casas, y, en definitiva, a todos aquellos que se ponen del lado de la equidad y la justicia social. Para el mismo la **lucha por la autonomía de los pueblos originarios** constituye un compromiso y una prioridad. Así mismo, valora y apoya la lucha de la población afrodescendiente, reconociendo la importancia de su aporte a la cultura nacional.

El movimiento independiente de rescate nacional es **Ecologista**. Reclama el pleno respeto al medio ambiente, reivindica el derecho de las presentes y futuras generaciones a vivir en un ambiente sano. Entiende plenamente la necesidad de la justicia intergeneracional como itrageneracional.

El movimiento independiente de rescate nacional es **Humanista**. Se propone la plena vigencia de los derechos humanos en el país, incluyendo los de carácter personal, políticos, sociales, culturales, económicos y medioambientales,

El movimiento independiente de rescate nacional es **Pluralista**. Tiene la vocación de constituirse como un espacio organizativo con la capacidad de integrar diversas corrientes del pensamiento progresista, las cuales se hermanan en un diálogo fecundo en

El movimiento independiente de rescate nacional es **Feminista**. Rechaza el actual sistema de dominación sexista – patriarcal. Declara su compromiso con la promoción de la plena igualdad de género y de democracia paritaria.

El movimiento independiente de rescate nacional es **Ético**. Busca una profunda renovación ética de la vida política del país. Se propone una lucha total en contra de la corrupción y el clientelismo. Toma como propios los principios de transparencia y rendición de cuentas.

El movimiento independiente de rescate nacional es **Pacifista**. Encuentra en la resistencia no violenta el método para promover el cambio social necesario. Se declara a favor de la convivencia pacífica a nivel internacional.

El movimiento independiente de rescate nacional es **Latinoamericanista**. Encuentra en la integración de los pueblos latinoamericanos un elemento fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos.

El nuevo desarrollo

El nuevo estilo de desarrollo tiene su fundamento ético en el principio de que el fin primordial del desarrollo es **la construcción de un país en que cada uno de los hombres y mujeres que lo conforman puedan desarrollar, en la armonía de la convivencia social y el respeto a la naturaleza, todas sus potencialidades y capacidades creativas como seres humanos**. Esto conlleva un proyecto de desarrollo que asegure todas las necesidades básicas de la población, así como la plena inclusión y participación de todos en la construcción de la nueva sociedad.

Se trata de una estrategia de desarrollo basada en la efectiva realización del conjunto de los **derechos humanos**. Es decir, tanto de los derechos políticos y ciudadanos tradicionales, como los de carácter social, nacional y ambiental. Entre sus principios básicos el nuevo estilo de desarrollo tendrá que contar con la implementación de una **nueva democracia** deliberativa, basada en la plena participación, la inclusión, la auditoría social, la lucha contra la corrupción y el pleno respeto a la institucionalidad.

No menos importante es el principio de **la equidad y la justicia social** para asegurar que el esfuerzo nacional se exprese en el creciente bienestar de la población y no en el escandaloso enriquecimiento de solo unos cuantos. También se deberá dar plena vigencia al principio de la **sostenibilidad ambiental**, que asegure la estabilidad de nuestro medio ambiente y el bienestar de las futuras generaciones. Además se deberá aplicar el principio de la **defensa de nuestra herencia común** en aspectos tan importantes como lo son el Canal de Panamá y los otros elementos que constituyen el patrimonio de la nación, la presencia de servicios públicos solidarios, así como de la rica diversidad cultural nacional.

Estos principios se concretan en una estrategia de desarrollo económico y social cuyo centro específico es asegurar a todos los panameños y panameñas un **trabajo digno** que sirva de base no solo a la satisfacción de sus necesidades básicas, sino, además, a una vida sana, prolongada, en la que pueda desarrollarse con libertad y participar de manera activa, deliberativa y protagónica en la construcción de una real democracia y la consolidación de la nación panameña.

Esta estrategia apunta al fortalecimiento del sector productivo del país, en un esquema que aprovecha las ventajas del país en la esfera de los servicios de exportación, pero que también se propone el desarrollo de la base material de la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la agricultura y la agroindustria destinada a este fin. Así mismo, se busca poner en marcha un proceso de industrialización de creciente complejidad tecnológica, vinculado con la integración económica dentro de los criterios de solidaridad y complementariedad.

La forma de administrar el Canal de Panamá, sus áreas adyacentes y los recursos que genera, requiere un nuevo modelo de gestión que permita al conjunto de la nación panameña ser parte de la toma de decisiones sobre su administración y sobre el uso de sus ingresos, sin afectar las decisiones de carácter técnico, en las que la voz de los ingenieros y especialistas debe tener su peso específico. Es necesario democratizar la ACP para que deje de ser instrumento en manos de un puñado de privilegiados, y sea parte constitutiva de la Nación en función del "uso más colectivo posible". Los excedentes del Canal de Panamá constituyen un elemento clave para el financiamiento de la transformación productiva con equidad y sostenibilidad ambiental propuesta en esta estrategia.

Los fines de la estrategia le otorgan especial importancia a los gastos sociales, entendiendo que los mismos deberán promover los derechos humanos fundamentales, así como la formación de los recursos humanos altamente capacitados que necesita el nuevo estilo de desarrollo. La educación, la salud y la seguridad social para todos se consideran como elementos de alta prioridad. La investigación científico – tecnológica, así como la difusión del progreso tecnológico compatible con el respeto al ambiente constituyen una prioridad complementaria a las anteriores.

El avance de la estrategia alternativa también se orienta a reforzar las condiciones de justicia social y equidad. Para esto se deberá establecer un salario que permita efectivamente la satisfacción de las necesidades básicas de la población, a la vez que establecen los necesarios mecanismos de control de precios que eviten la especulación oligopólica, con el fin de defender los niveles de vida de la población y la actividad de los productores patriotas. Consecuentemente el proceso también apunta a proteger y promover la actividad de los micro, pequeños y medianos productores de la ciudad y el campo.

Especial importancia tiene el establecimiento de las condiciones que aseguren el pleno respeto del medio ambiente. En este caso el país deberá declararse libre de minería metálica, a la vez que se fortalece el contenido y la aplicación de las leyes de protección

al medio ambiente. Al igual que la alimentación el acceso al agua de calidad deberá constituirse como un derecho humano efectivo.

En el ámbito de la infraestructura el nuevo modelo de desarrollo se propone redirigir la creación de la nueva infraestructura hacia los objetivos de la estrategia propuesta, evitando el despilfarro en obras que, si bien favorecen los intereses de los sectores dominantes, no promueven el real desarrollo productivo del país, ni la solución de los problemas básicos de la población. En este ámbito se trata de lograr una solución social a los problemas del transporte, que evite que este sector se convierta en un simple vehículo de enriquecimiento de los sectores dominantes que controlan los órganos del Estado. Todo esto conlleva a una utilización racional y priorizada de los recursos públicos, que evite el endeudamiento irracional que afecte el bienestar de las futuras generaciones. El uso prudente de las finanzas públicas, deberá ser acompañado por una política de plena transparencia, lucha decidida contra la corrupción, rendición de cuenta y participación ciudadana.

La sociedad panameña se siente indefensa y ha sido duramente impactada por la ofensiva que han asumido las bandas de criminales que todos los días siembran el luto y el terror en las calles de nuestras ciudades a nivel nacional. Un conjunto de factores están incidiendo en el problema tales como la libre entrada de criminales, sicarios, traficantes de países vecinos, la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, la erosión de principios éticos, la deformación de la conciencia social producida por los medios masivos de comunicación al servicio de la sociedad de consumo y la acumulación de capital, la desarticulación de la familia como consecuencia de los desajustes sociales que introdujeron las políticas públicas neoliberales que sostienen el modelo económico obsoleto y la corrupción institucional. Por esto la estrategia alternativa insiste en la importancia central que tiene la superación de esta situación.

En el plano institucional el país precisa de reformas profundas. Estas deberán asegurar la profundización de la democracia política, social y económica, incluyendo la democratización de los procesos electorales. Así mismo deberá asegurar un sistema de justicia independiente, eficaz y que opere con tiempos oportunos. El nuevo estilo de desarrollo precisa de una nueva constitución política que recoja los elementos centrales de la sociedad a que aspiran la mayoría de los panameños. Este proceso constituyente deberá tomar la forma más democrática posible, es decir la forma de una **constituyente originaria**.